



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Demandante:** Clara Inés Borda Guerra y otros  
**Demandado:** Nación – Fiscalía General de la Nación  
**Radicación:** 15001 3333 004 **2017-00211** 00.

### **ASUNTO**

La juez titular del Despacho, al advertir que concurre en la causal contenida en el numeral 1. del artículo 141 del Código General del Proceso, procede a declarar su impedimento para separarse del conocimiento y trámite del proceso de la referencia.

### **ANTECEDENTES**

- La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DS-25-12-4-2594 de 07 de diciembre de 2016, mediante el cual la Nación - Fiscalía General de la Nación negó la reliquidación de prestaciones sociales causadas en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 y a futuro, teniendo en cuenta para ello la Bonificación Judicial creada como factor salarial, mediante Decreto 382 de 2013.
- La titular de este Despacho manifestó su impedimento para conocer del asunto, por incurrir en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, es decir, por asistirle interés en el resultado del proceso, comoquiera que ostentaba la calidad de demandante dentro del proceso N° 2018-00116, adelantado contra la Nación- Dirección Ejecutiva de Administración judicial ante el Juzgado ad-Hoc Administrativo del Circuito de Pasto, mediante el cual se pretende que la bonificación judicial constituya factor salarial (fs 188-193).
- El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja declaró infundado el impedimento, y devolvió el expediente a este Juzgado para que continuara conociendo del mismo (fs. 196-200)
- A la fecha, el Despacho agotó las etapas propias de la audiencia inicial, encontrándose en turno para sentencia de primera instancia (f. 203).

### **CONSIDERACIONES**

La figura del impedimento tiene como fin principal garantizar la imparcialidad e independencia del juez<sup>1</sup>, y permite al operador judicial apartarse del conocimiento

<sup>1</sup> CE. SCA. SIII - Subsección C, consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente No. 68001-23-31-000-2011-00694-01 (43431).

de un asunto determinado, cuando las particularidades del mismo puedan afectar su decisión.

El artículo 130 del CPACA establece que los magistrados y jueces deberán declararse impedidos o serán recusables, en los casos allí previstos, de acuerdo con las causales contenidas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil —hoy art. 141 del Código General del Proceso—.

El artículo 140 del CGP, de manera concordante, dispone que la declaración de impedimento deberá efectuarse tan pronto como se advierta la existencia de la causal respectiva, con expresión de los hechos que la sustentan.

El artículo 141 del CGP, entre otras causales de impedimento, establece la siguiente:

*“Art. 141. Causales de recusación:*

*1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.** (...)”*

En el caso concreto, el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja no aceptó el impedimento formulado por la titular de este Despacho, en razón a la posición asumida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, según la cual *“...los jueces no tienen un interés directo o indirecto en las demandas donde se pretende que la bonificación judicial se considerada factor salarial con incidencia prestacional a favor de los servidores de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, debido a que la fuente normativa del emolumento no es la misma y no existe coincidencia en lo que respecta al régimen aplicable al demandante.”*<sup>2</sup>

Ahora bien, es el caso destacar que el H. Consejo de Estado – Sección Segunda, en asuntos laborales relacionados con el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación (prima especial del 30%, bonificación por compensación), en principio, había decidido declarar infundados los impedimentos de magistrados de tribunal, al considerar que los emolumentos perseguidos con carácter salarial para efecto de la liquidación de las prestaciones sociales se encontraban regulados en normas diferentes, razón por la cual no se configuraba la causal del numeral 1.º del artículo 141 del CGP, en tanto, el régimen de la Rama Judicial es diferente.

No obstante, dicha Corporación decidió replantear su postura<sup>3</sup>, al advertir que sus consejeros también se encuentran cobijados por la Ley 4ª de 1992, que regula los aspectos salariales y prestacionales de los servidores y funcionarios de la Rama

<sup>2</sup> Auto de 14 de febrero de 2018, M.P. Dr. José Ascención Fernández Osorio, Exp. 2017-00239-01

<sup>3</sup> En este sentido, pueden consultarse:

CE. SCA. SII – Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 11001-03-25-000-2018-00089-00(0290-18)

CE. SCA. SII – Subsección B, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 25000-23-42-000-2016-03375-01(2369-18)

Judicial, la cual, valga mencionar, también es fuente normativa del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, el Congreso de la República dictó la Ley 4ª de 1992 relacionada con las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, para ello, concretamente, en el artículo 1.º dispuso:

*“El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:*

*(...)*

*b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República (...)* (Destaca el Juzgado)

Adicionalmente, la Sección Segunda precisó que a pesar de que los emolumentos objeto de discusión tanto para la Rama Judicial, como la Fiscalía General de la Nación reposaban en instrumentos normativos diferentes, lo cierto era que la controversia giraba en torno a definir el carácter salarial de aquellos factores, para efecto de la liquidación de las prestaciones sociales, lo que eventualmente conllevaría un beneficios para los funcionarios de ese máximo Tribunal.

En este orden de ideas, para el caso concreto, con fundamento en la rectificación de la postura del Consejo de Estado – Sección Segunda, es razonable considerar que la causal de impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, para los jueces que conocen del tema de la bonificación judicial de la Fiscalía General de la Nación, se configura por el hecho de que los operadores judiciales son potencialmente beneficiarios de la interpretación judicial sobre la naturaleza de dicha bonificación que se defina en este proceso, la cual también atañe a su situación salarial y prestacional.

De acuerdo con lo anterior, al considerar que en este caso se discute la nulidad del acto administrativo adoptado por la entidad demandada, mediante el cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales y laborales de la parte demandante, teniendo como base para su liquidación la bonificación judicial, se advierte que la suscrita funcionaria concurre en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º de artículo 140 del CPACA.

En este sentido, conviene mencionar que la calidad de juez de la República otorga el derecho a percibir la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013, en términos similares al Decreto 382 de 2013, prestación de la cual se reclama su carácter salarial a efecto de obtener la reliquidación de las prestaciones laborales y demás emolumentos percibidos, como retribución de la prestación personal del servicio; luego, surge un interés indirecto sobre el resultado del proceso, y el deber de declarar el correspondiente impedimento con el fin de asegurar los principios de independencia e imparcialidad, que rigen la administración de justicia.

De conformidad con lo expuesto, al considerar que a todos los jueces administrativos del Circuito de Tunja les asiste un interés indirecto, porque la

interpretación judicial derivada de esta controversia atañe a su régimen salarial y prestacional, corresponde remitir las diligencias ante el Superior Funcional, para que de acuerdo al numeral 2.º del artículo 131 del CPACA, se surta el trámite correspondiente.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

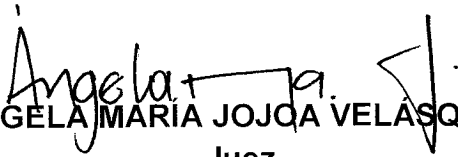
### RESUELVE

**PRIMERO.- Declarar** que la titular del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja concurre en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, la cual comprende a los demás jueces administrativos del Circuito Judicial de Tunja, según las razones expuestas en esta providencia

**SEGUNDO.-** Por Secretaría, **remitir** las presentes diligencias a la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Tunja, para que el expediente sea remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá, para lo de su cargo.

**TERCERO.-** Déjense las anotaciones y constancias de rigor.

### Notifíquese y cúmplase

  
ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ  
Juez

<sup>4</sup>CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N.º <u>28</u> De Hoy 21 de junio de 2019 A LAS 8:00 a.m.  DIANA CAROLINA QUINTERO RODRÍGUEZ SECRETARIA
--

<sup>4</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 21 de junio de 2019 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co).  
Diana Carolina Quintero Rodríguez – Secretaria